

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Nicolás, Carolina y Julián Restrepo Archila, sucesores de Olga Beatriz Archila Peláez
DEMANDADO	Diego Luis Isaza Sánchez
PROCEDENCIA	Juzgado 21 Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 021 2020 00374 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 87 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Honorarios profesionales
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Nicolás, Carolina y Julián Restrepo Archila, sucesores de Olga Beatriz Archila Peláez**. Radicado único nacional 05001 3105 **021 2020 00374** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 13**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Se tiene que los actores convocaron a juicio al demandado pretendiendo:

"PRIMERA: Declarar que entre los señores DIEGO LUIS ISAZA SANCHEZ, como REPRESENTADO y la abogada OLGA BEATRIZ ARCHILA PELAEZ, como REPRESENTANTE JUDICIAL, se suscribió un contrato de REPRESENTACIÓN O MANDATO JUDICIAL, mediante el cual el demandado contrató los servicios profesionales de la representante, para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente del interdicto MIGUEL ISAZA MEJIA.

SEGUNDA: Que los honorarios profesionales pactados fueron en la modalidad de CUOTA LITIS, igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de las mesadas, retroactivas y futuras, obtenidas por la gestión de la mandataria judicial.

TERCERA: Que la gestión de la abogada fue exitosa en un CIENTO POR CIENTO (100%), en razón de la cual le fueron reconocidas mesadas pensionales, retroactivas y futuras, por un valor de \$536.359.935, suma ésta de la cual deberá el demandado reconocer y pagar a favor de la sucesión ilíquida de la abogada OLGA BEATRIZ ARCHILA PELAEZ, un porcentaje igual al DIEZ POR CIENTO (10%).

CUARTA: Condenar al demandado al pago de las costas y agencias en derecho."

En sustento de ello se afirma que, el 10 de enero de 2018, la señora Olga Beatriz Archila Peláez, abogada, y Diego Luis Isaza Sánchez, en calidad de cliente, celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales, mediante el cual la profesional se obligaba a gestionarle al cliente, por cualquier medio judicial o extrajudicial, el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de sobrevivientes de la señora Alina Jiménez Tamayo, a favor de su hijo interdicto Miguel Jiménez Isaza, ante el fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., considerando que dicho ente negó la prestación al señor Diego, en calidad de curador de su hijo Miguel.

Agrega que como honorarios, el demandado se obligó a pagarle una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor efectivamente reconocido por pensión de sobrevivientes a favor del hijo interdicto del

cliente, porcentaje que de acuerdo al contrato se aplicaría a la sumatoria de: ***el valor del retroactivo reconocido, más el valor de las mesadas reconocidas por el número de mesadas anuales reconocidas; por el tiempo reconocido, que de ser vitalicia, el tiempo se calcularía considerando el promedio de vida de los varones en Colombia, que son 72 años, menos la edad del señor Miguel al momento de serle reconocida la pensión;*** que el demandado se comprometió a pagar lo pactado una vez le fuera reconocida la prestación, lo que sucedió el 19 de febrero de 2019, sin embargo, ha evadido su obligación.

Que, para la obtención de la pretensión de su cliente, la profesional realizó las siguientes gestiones judiciales y extrajudiciales:

El 7 de febrero de 2018, instauró tutela en contra de Protección S.A., tramitada en el Juzgado 7 Civil Municipal de Medellín bajo el radicado: 05001 40 03 007 2018 00120 00, solicitando reconocer en forma definitiva la prestación de sobrevivencia en favor de Miguel Jiménez Isaza, como hijo inválido de la afiliada fallecida Alina María de Jesús Jiménez Tamayo; trámite que también atendió en segunda instancia, ante el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín, el que inicialmente decretó la nulidad y ordenó vincular a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, con el fin de que entrara a resolver el recurso de reposición interpuesto contra el dictamen que fijó la PCL en un 35%, emitiéndose un nuevo dictamen que la aumentó al 55%; que frente a este Protección S.A. interpuso recurso de apelación, por lo que dentro del trámite de la tutela se ordenó al fondo realizar la diligencia correspondiente para que la Junta Nacional lo resolviera y emitiera la experticia pertinente, lo que en efecto ocurrió, confirmando la calificación de invalidez de Miguel Isaza en un 55%, con fecha de

estructuración desde de su nacimiento, indicando que contra el mismo no procedían más recursos.

Advierte que también la togada redactó, en representación del contratante aquí demandado, la carta para que se citara a su hijo interdicto con el fin de que se le realizara el respectivo examen por parte de la Junta para su calificación de PCL, así como la misiva que envió a Protección S.A. para el trámite de la pensión y la cancelación de las expensas del dictamen, lo que en efecto se hizo el 20/12/2018.

Expone que con las pruebas recaudadas, la abogada procedió a redactar una petición a nombre del demandado, mediante la cual reiteraba la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivencia en favor de Miguel Isaza, indicándole qué documentos adicionales debía anexar, tales como las declaraciones extrajuicio, en las que se dejaba constancia de la dependencia económica que Miguel tenía con su madre al momento de fallecer, así como también otros escritos necesarios para dicha gestión; que a lo anterior Protección S.A. dio respuesta el 19/02/2019, reconociendo la prestación en favor del señor Miguel Isaza Jiménez, en un 100%, en cuantía del mínimo legal (13 mesadas al año), y un retroactivo de \$19.615.551 (desde 10-02-2017 hasta 30-01-2019).

Precisa que, de acuerdo al contrato suscrito por las partes y la pensión reconocida, los honorarios se liquidan:

"Promedio de vida de varones en Colombia: 72 años menos edad de Miguel Isaza al momento de recibir la pensión: 24 años ya que nació el 29 de marzo de 1994 y la pensión le fue reconocida el 30/01/2019 = 72-24 =48 años.

***Valor mesada pensiona! \$828.116 por 13 mesadas al año \$10.765.508 por 48 años = 10.765.508 * 48 = \$516.744.384 más retroactivo = \$516.744.384 + \$19.615.551 = \$536.359.935
TOTAL, SUMATORIA ANTERIORES RUBROS = \$536.359.935***

Aplicación del 10% sobre la suma anterior = \$536.359.935 * 10 0/0 = \$ 53.635.993,5

VALOR HONORARIOS CONTRATADOS = \$ 53.635.993,5, adeudados por el deudor o cliente.

Finalmente aseveran que, como la gestión de la abogada fallecida, Olga Beatriz Archila Peláez, fue exitosa en un ciento por ciento, el demandado está en la obligación de cumplir con el pago de los honorarios pactados, lo que hasta la fecha no ha hecho.

En auto del **18 de enero de 2021, se admitió la acción.** Notificado el demandado procedió a dar respuesta a través de apoderada, manifestando frente a los hechos no ser ciertos, en la medida que el proceso referido en la demanda, inicialmente fue tramitado por la abogada Juliana Perdomo; que la profesional Archila llegó posteriormente e interpuso una acción de tutela, causas en las cuales no existen debates probatorios, ni gestiones distintas, pues únicamente el fallador debe cotejar el caso a la luz de las normas constitucionales.

Aclara que la profesional comenzó a representar a sus hijos en la sucesión de la madre y luego gestionó la tutela referida; que, en dichas relaciones le pedía que con Juan Alberto Castillo le remitiera hojas firmadas en blanco para tramitar diversas solicitudes a lo que él accedía, por lo cual solicitaría un peritaje para demostrar que la época en que se imprimió el “contrato” no era la misma de la firma, pues ni él, ni nadie hubiesen firmado un acuerdo que comprometiera la pensión de su hijo por 72 años, máxime que se trataba de una mesada del mínimo legal, luego no era lógico que un interdicto cancelara la suma pretendida, en la medida, que incluso se tendría que utilizar toda la pensión de su hijo discapacitado durante 6 años para cubrir los honorarios pretendidos.

La primera instancia culminó con **sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito, el 22 de marzo del año en curso**, en la que dispuso:

"1) Condenar al demandado DIEGO LUIS ISAZA SÁNCHEZ a pagar a los sucesores de OLGA BEATRIZ ARCHILA PELÁEZ la suma de \$2.353.866 por concepto de honorarios profesionales por la reclamación extra judicial de la pensión de sobrevivencia en favor del hijo discapacitado.

2) Condenar al demandado a pagar la anterior suma debidamente indexada, calculada desde el 1-mar-2019, hasta que se verifique el pago.

3) Condenar en costas al demandado y en favor del (de la) DEMANDANTE. Agencias en derecho \$176.540 (7,5% de la suma reconocida)."

En sustento de ello argumentó el fallador, que, del análisis en conjunto de los medios de prueba, a la luz de la sana crítica, se podía concluir que el contrato aportado por la parte demandante era absurdo, exagerado y abusivo, teniendo en cuenta que se estaba pactando por honorarios para un trámite extrajudicial, una suma de \$53.635.993, de forma anticipada, con el fin de reclamar una pensión de sobrevivientes equivalente al mínimo legal, lo que llevaría a compulsar copias para la correspondiente investigación disciplinaria, si no fuese por el fallecimiento de la profesional, siendo igualmente absurdo, afirmar que el demandado hubiese pagado aquella suma como lo quiere hacer ver, cuando era plenamente consciente de la desproporción de la misma lo cual dejó claro al contestar la demanda.

Agregó que las afirmaciones del señor Diego, así como las de su testigo, fueron notoriamente mentirosas, en la medida que las consignaciones aportadas, atendiendo al criterio temporal, no correspondían con la época del trámite llevado a cabo por la abogada respecto a la pensión de sobrevivencia, aunado a que la declaración del señor Juan Alberto Castillo estuvo llena de contradicciones, por lo cual estableció los honorarios conforme a lo dispuesto por la Corporación Colegio Nacional

de Abogados de Colombia – CONALBOS, tarifas 2020-2021, que en su acápite 14.5 dispone un cobro por estos trámites extrajudiciales del 12% sobre el valor reconocido, y en esa medida, en el caso, como se otorgó un retroactivo pensional de \$19.615.551.00, tal porcentaje equivale a \$2.353.866.00, cuantía que no se encuentra afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción. Disponiendo igualmente la indexación de tal valor a partir del 1º de marzo de 2019, fecha de su exigibilidad, hasta el momento de su cancelación.

Inconforme, **el apoderado de la parte activa, interpuso recurso de apelación** señalando estar plenamente acreditado que la Dra. Archila representó al demandado en varias oportunidades, en diversas gestiones jurídicas y administrativas, de ello dio cuenta, Lía Catalina Archila, su hermana, quien para ese entonces fungía como su secretaria, la que fue absolutamente diáfana al afirmar que los honorarios en discusión fueron un pacto que su consanguínea y el señor Diego hicieron por los servicios no pagados, por todas las actividades judiciales y extrajudiciales que la doctora Archila ejecutó en su representación, como incluso lo reconoció éste.

Añade que, desde el punto de vista eminentemente jurídico, **el contrato no fue objeto de ningún reparo vía excepción o vía demanda de reconvención, por lo tanto, así sea exorbitante el mismo tiene sus efectos jurídicos**, además expresamente fue reconocido en un monto superior al pactado, luego, debe permanecer con todas sus consecuencias legales, pues como lo dijo la testigo, correspondía a una sucesión de honorarios por gestiones anteriormente pactadas.

Agrega que, si se aceptara lo dispuesto por el juez de primera instancia, esto es, la regulación de honorarios, a su juicio, **la fijación debe hacerse para la fecha de la sentencia, al estarse recibiendo la mesada por el beneficiario gracias a los buenos oficios de la Dra. Archila.**

De la oportunidad para presentar alegatos hicieron uso el apoderado de la parte demandante quien expuso que el demandado nunca atacó las pretensiones de la demanda mediante los mecanismos que la legislación adjetiva laboral regula en estos casos, pues no opuso a lo pretendido excepción alguna tendiente a restar efectividad a las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de mandato suscrito con la fallecida, ni al respecto formuló demanda de reconvención con el fin de obtener a la declaratoria judicial de la excesiva tasación de los honorarios, que se hace necesario recalcar, nunca le reconoció o pago a la fallecida togada, lo que bien pudo haber hecho mediante la oposición de la correspondiente excepción de mérito, como antes se ha mencionado, falencia ésta que fue enmendada por el Señor Juez de la primera instancia de forma irregular y sin que tuviera la facultad legal para hacerlo.

Agrega que además el demandado no actuó de la forma procesal debida, y precisamente porque tenía la certeza y la convicción que los honorarios pactados en el contrato suscrito entre éste y su apoderada Olga Beatriz Peláez Archila, eran los realmente debidos, pues la labor jurídica adelantada por ella no se circunscribió únicamente al trámite del reconocimiento de la pensión de sobreviviente de su hijo menor, sino también a otras actividades profesionales que en representación del demandado implicaron su representación judicial y administrativa en otros procesos, tal como claramente lo hizo saber quien tenía el

conocimiento pleno y absoluto al respecto, la señora Lía Catalina Archila Peláez, en su declaración rendida en el trámite de la primera instancia al haber fungido como secretaria y auxiliar de la fallecida abogada, en todas las actividades profesionales adelantadas por ésta, incluidas obviamente todas las actuaciones profesionales desplegadas como apoderada del señor DIEGO LUIS ISAZA, testigo cuya credibilidad nunca fue puesta en tela de juicio por el demandado o su apoderada toda vez que las atestaciones de LIA CATALINA no fueron objeto de tacha alguna por parte del demandado.

Lo anterior se corrobora, además, con el hecho del demandado haber presentado como única excepción la de PAGO, ya que al afirmar que efectivamente había pagado todo el monto de los honorarios pactados en el contrato de representación judicial, suscrito con su fallecida apoderada, implícitamente está reconociendo la validez de dicho contrato y la causa o causas que subyacen a las obligaciones adquiridas por él.

Agrega que, al decretar oficiosamente la regulación de honorarios en la sentencia recurrida, se está dando trámite a una excepción que no fue propuesta directamente en la contestación de la demanda por el accionado, lo que implica que el fallador de la primera instancia está vulnerando el principio de la congruencia, ordenando implícitamente la rescisión del contrato de prestación de servicios y cambiando, sin poder hacerlo, lo expresamente pactado en dicho contrato, que es ley para contratista y contratante, para ajustarlo a los términos que él cree son los justos, legales y equitativos, por la cual solicita revocar la sentencia y proferir una decisión con apego a la ley.

De manera subsidiaria, reitera que, si es decisión de la sala confirmar la sentencia inicial, se regulen los honorarios a cargo del demandado a la fecha actual.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Para lo que interesa a la Sala, conforme a la fijación del litigio, lo que no fue objeto de reparo, y con los medios de convicción allegados, quedan probados los siguientes supuestos: El fallecimiento de la abogada Olga Beatriz Archila Peláez, el 10 de febrero de 2017; la filiación materna de la Dra. Olga Beatriz Archila Peláez con Nicolás, Carolina y Julián Restrepo Archila (registros civiles de defunción y de nacimientos, folios 9,10, 12 y 13 del archivo 02 Demanda. Pdf.); que entre la profesional del derecho referida y el demandado se celebró un contrato de prestación de servicios, en el que el señor Diego Isaza era el cliente y la fallecida, Dra. Olga Beatriz su mandataria, para adelantar gestiones judiciales o extrajudiciales ante Protección, con el objeto de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia en favor del hijo invalido - interdicto del accionado; que este último, como curador de su descendiente, otorgó poder para que la Dra. Archila lo representara ante el fondo de pensiones (folios 118 y 119 del archivo 02 Demanda. pdf.); que la profesional del derecho promovió acción de tutela contra la AFP referida, con poder otorgado por el demandado (archivo 02Demanda.pdf folios 28 a 35). También está acreditado finalmente, que la pensión de sobrevivientes en favor del hijo interdicto del señor Isaza fue efectivamente reconocida por Protección S.A mediante comunicación del 19 de febrero de 2019, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. (Archivo 02 Demanda.pdf folios 15 y 16).

Ahora, si bien la sentencia fue condenatoria, en el recurso asevera el apoderado de los demandantes, que debe ordenarse **el pago de los honorarios pactados en el contrato aportado con la demandada**, en esa medida, el **problema jurídico en esta instancia** se contrae a determinar, si el señor Diego Luis Isaza Sánchez adeuda a la parte activa por concepto de honorarios causados con ocasión de la actividad profesional desplegada por la fallecida doctora Dra., Olga Beatriz Archila Peláez, lo convenido en tal documento, o si por el contrario, al tratarse de un acuerdo manifiestamente ilegal y abusivo debe desconocerse como lo dispuso el a quo, cuantificando los honorarios de acuerdo a la tarifa establecida por Conalbos. En caso de ratificar la decisión inicial, habrá de examinarse si es procedente fijar los honorarios hasta la fecha de la sentencia como subsidiariamente lo solicita el apelante.

Pues bien, para resolver el asunto, sea primero advertir que el artículo 2142 del Código Civil define el contrato de mandato como aquel en el que una persona confía a otra la gestión de uno o más negocios, esta forma de contratación se extiende a todos aquellos servicios ofrecidos por las profesiones y carreras que suponen largos estudios, tal y como lo determina el artículo 2144 de la misma obra, sin que tal acuerdo exija solemnidad alguna, siendo viable su realización verbal, en los términos del artículo 2149 ibídem; sin embargo, su ejecución deberá ceñirse rigurosamente a los términos pactados, que en caso de ser oneroso, que es la regla general, implicará la obligación a cargo del mandante, de pagar la prestación acordada, una vez la gestión haya sido ejecutada.

Sobre la generación de honorarios en este tipo de convenios, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación

Laboral, en sentencia SL, 10 dic 2007, rad. 10046, reiterada en la SL11265-2017 y en la SL2545-2019, preciso:

[...] es de suponer que el ejercicio de la abogacía como el de cualquier profesión liberal genere honorarios, pues los profesionales por lo general obtienen el sustento de los servicios que prestan, de manera que debe concluirse que la onerosidad es un elemento de la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, pero no uno esencial en cuanto, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de trabajo, es legalmente permitido que quien presta un servicio profesional independiente decida hacerlo en forma gratuita, o de manera que su retribución sea aleatoria, como cuando se condiciona a la obtención de un resultado (resalta la sala)

Luego, quien ejerce la profesión de la abogacía, como el que ejecuta cualquier otra profesión liberal que cause honorarios, salvo que decida hacerlo de manera gratuita, tiene derecho a reclamar el pago cuando esté demostrada la realización actividad pactada.

Ahora, si bien las partes están en libertad para pactar los honorarios, existen límites en cuanto a su monto, frente al particular, la jurisprudencia constitucional ha enseñado:

"Límites a la autonomía de la voluntad en materia de fijación de honorarios jurídicos.

48. El caso sometido a consideración de esta Sala de Revisión, implica recordar que la abogacía como manifestación de la libertad de escoger una profesión u oficio supone límites para quien la ejerce. Esta Corporación ha precisado que el goce de este derecho no tiene un carácter absoluto, "no solo por el hecho de que a su ejercicio concurren distintas variables de naturaleza política y social, sino, además, porque la Constitución no patrocina ni incentiva un desempeño de las profesiones y oficios despojados de toda vinculación o nexo con los deberes y obligaciones que su ejercicio comporta".

La jurisprudencia de la Corte ha señalado que este derecho tiene unos límites intrínsecos y extrínsecos. En cuanto a los primeros, ha dicho la Corte que se derivan del propio concepto del derecho, y frente a los segundos ha precisado que son aquellos impuestos expresa o implícitamente por la Constitución y por la ley para garantizar la vigencia de otros valores e intereses igualmente relevantes, como pueden ser los derechos ajenos, el orden público, el bien común y el deber correlativo al ejercicio de cada derecho.

49. Ligado con lo anterior, esta Corporación también ha afirmado que la autonomía de la voluntad privada se manifiesta en la existencia de la libertad contractual pero se encuentra sujeta a especiales restricciones cuando están en juego derechos fundamentales, se trata de servicios públicos, una de las partes ocupa una posición dominante o los acuerdos versan sobre prácticas restrictivas de la competencia, o cuando se entiende que el ejercicio de la voluntad y la libertad contractual persigue no sólo el interés particular sino también el interés público o bienestar común. En estos casos corresponde al Estado intervenir para controlar la producción de efectos jurídicos o económicos, con el propósito de evitar abusos de los derechos, y el papel del juez consiste en velar por la efectiva protección de los derechos de las partes, sin atender exclusivamente la intención de los contratantes.

50. Las anteriores precisiones cobran una relevancia especial cuando se trata del ejercicio de la abogacía. En diversas oportunidades la Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario, ha dicho, constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia, y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del Código disciplinario, al abogado se le asignó un deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos de las personas.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

Es por ello que a través de la Ley 1123 de 2007, el Legislador estableció dentro de los deberes del abogado el obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales con sus clientes. En desarrollo de dicho deber, el abogado debe fijar sus honorarios con criterios equitativos, justificados y proporcionales, en relación al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el

efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Para tal fin, el abogado debe acordar el objeto del mandato, los costos, la contraprestación y la forma de pago, en términos comprensibles para su cliente, pues salvo que este último sea profesional del derecho, no es posible suponer que le sean familiares algunos conceptos jurídicos. Para evitar el ejercicio abusivo de posiciones dominantes, es deber del apoderado informar adecuadamente las particularidades de su labor a su cliente; ilustrarlo pedagógicamente acerca de los significados jurídicos de aquellos vocablos que susciten duda y, en general, de generar conocimiento de su mandante con elementos que le permitan adquirir obligaciones con un consentimiento libre e informado.

(...)

No obstante, dada la desigualdad en los conocimientos que se predica entre un abogado y su cliente, que se supone inexperto en las áreas del derecho, cobra mayor relevancia la obligación de informar a cargo del profesional, debido a la evidente necesidad de compensar la relación jurídica mediante la protección de la parte débil.

*52. Es por ello que la ley contempló **como deberes del apoderado actuar con lealtad y honradez en sus relaciones con sus clientes. En el artículo 35.1 de la Ley 1123 de 2007, se estableció al respecto: "Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos".***

52.1. Siguiendo el tenor del precepto, los verbos rectores del mismo son "acordar", "exigir" u "obtener", lo que implica que, aunque el abogado no haya conseguido efectivamente la cantidad desproporcionada de dinero, con el solo acuerdo de voluntades con pretensión cierta e inequívoca de obtención de un monto de tal característica, configura la falta. Así mismo, la doctrina de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en armonía con la jurisprudencia constitucional, ha señalado también que deben tenerse en cuenta cinco (5) criterios para determinar si existe una desproporción en la remuneración o beneficios obtenidos por parte del abogado, que es el primer elemento que configura el tipo disciplinario en comento. Veamos:

*"Al respecto, es necesario hacer referencia a la posición que la Corte Constitucional ha fijado sobre el cobro excesivo de honorarios, cuando manifestó: La jurisprudencia sobre la materia ha fijado 5 criterios para determinar si el abogado cobró honorarios desproporcionados: **(i)** el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, **(ii)** el prestigio del mismo, **(iii)** la complejidad del asunto, **(iv)** el monto o la cuantía, **(v)** la capacidad económica del cliente. Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación*

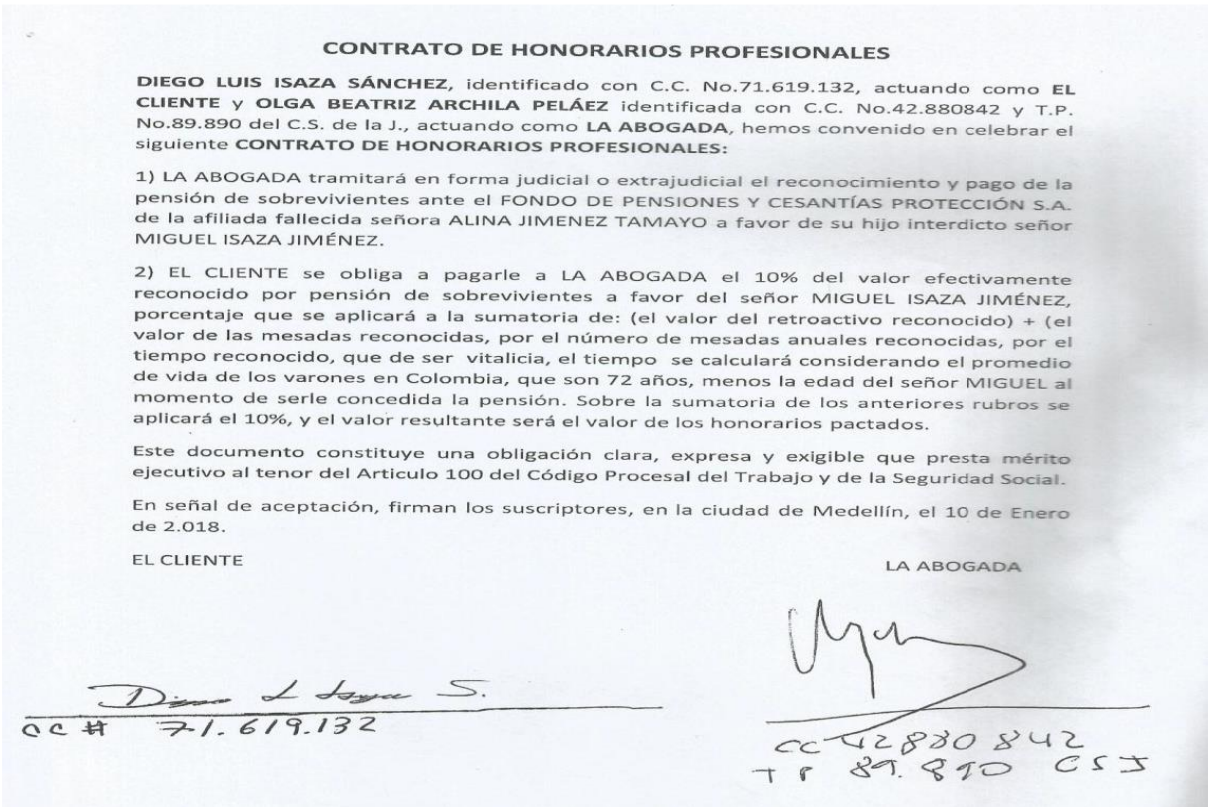
*particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados...*¹

Atendiendo las consideraciones anteriores, en el caso concreto se tiene que el apelante aduce que se debe tener en cuenta el contrato escrito aportado al haber sido pactado entre las partes, **así sea exorbitante**, pues es ley para las partes, además expresamente el demandado reconoció, incluso un monto superior al pactado.

Pues bien, comparte esta Corporación la tesis acogida por el juez de primera instancia, por lo que pasa a exponerse:

En el archivo 02. Demanda pdf., en la página 8, obra el contrato al que hace referencia el recurrente en el cual se lee:

“



¹ Sentencia T-625-2016

Como se indicó no existe discusión en que el hoy demandado otorgó poder a la Dra. Archila para que lo representara ante el fondo de pensiones Protección S.A. (folios 118 y 119 del archivo 02Demanda.pdf.), con el fin de obtener la pensión de sobrevivientes en favor de su hijo interdicto, y que en virtud de ello, ante la reclamación extrajudicial que se realizara, a través de comunicación del 19 de febrero de 2019 Protección reconoció la misma en los siguientes términos: (archivo 02Demanda.pdf folios 15 y 16).

"Señor(a):
DIEGO LUIS ISAZA SANCHEZ (CURADOR)
ISAZA JIMENEZ MIGUEL
En Protección estamos con usted para guiarlo en cada paso del camino hacia la materialización de sus metas.
Queremos informarle que luego de realizar el análisis de la cuenta individual de nuestro(a) afiliado(a) fallecido(a) ALINA MARIA DE JESUS JIMENEZ TAMAYO identificado(a) con cédula de ciudadanía CC 42880963; fallecido(a) el 10 de febrero de 2017 y acorde con los lineamientos legales, procedemos a reconocer la prestación económica por sobrevivencia, lo anterior por cuanto se logró establecer que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 la Ley 797 de 2003. (Ver Anexo 2 — Regulación Legal.)

El reconocimiento de dicha prestación, se da en favor de ISAZA JIMENEZ MIGUEL en calidad de 01 HIJOS INVA, a quien se le otorga el 100% de la mesada pensional, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 797 de 2003.

El detalle de la prestación reconocida es:

<i>Valor Mesada Pensional</i>	<i>\$828,116 *</i>	<i>13 mesadas por año</i>
<i>Valor retroactivo</i>	<i>\$19.615.151 **</i>	<i>Desde 10-feb.-17- Hasta 30-ene.-19</i>

**Es importante aclarar que los pagos deben realizarse directamente al señor diego Luis Isaza Sánchez curador del menor.*

**Del valor de la mesada pensional se descontará el 12% correspondiente a la cotización para la Entidad Promotora de Salud escogida por el beneficiario.*
** *del cual se realizará el descuento del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 12% dando cumplimiento a la Resolución 2388 de 2016 del Misterio de Salud y Protección Social.*
(...)”

Ciertamente, el pacto de honorarios allegado es notoriamente abusivo, independiente de que las partes lo hubiesen acordado, o que incluso el demandado en su interrogatorio hubiese aceptado una suma mayor,

pues no debe perder de vista el apelante, que ***no pueden derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres***², y en este evento claramente el contrato ya transcrito es injustificado, desproporcionado, y va en contravía de las disposiciones contenidas en la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, específicamente en el numeral 8° del artículo 28, y 1° y 2° del artículo 35, que a la letra disponen:

"Artículo 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:

(...)

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto..."

Y

"Artículo 35. ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente."

Pues nótese que se estipuló para un trámite extrajudicial, **respecto del cual ni siquiera se interpuso acción ordinaria**, unos honorarios del **10% sobre el retroactivo reconocido y sobre las mesadas futuras que se le pagaran al interdicto hasta los 72 años**, lo que ascenderían a, **\$53.635.993.00³, cuantía completamente desmedida e**

² Art.16 Código Civil

³ Tal y como lo pretende según el hecho decimo primero de la demanda:

De acuerdo al contrato suscrito por las partes y la pensión reconocida, los honorarios se liquidan:

"Promedio de vida de varones en Colombia: 72 años menos edad de Miguel Isaza al momento de recibir la pensión: 24 años ya que nació el 29 de marzo de 1994 y la pensión le fue reconocida el 30/01/2019 = 72-24 =48 años.

Valor mesada pensional! \$828.116 por 13 mesadas al año \$10.765.508

por 48 años = 10.765.508 * 48 = \$516.744.384 más retroactivo = \$516.744.384 + \$19.615.551 = \$536.359.935

TOTAL, SUMATORIA ANTERIORES RUBROS = \$536.359.935

Aplicación del 10% sobre la suma anterior = \$536.359.935 * 10 0/0 = \$ 53.635.993,5

injustificada en relación al servicio prestado, máxime que se trató de una **pensión de sobrevivientes, equivalente al mínimo legal y que a enero de 2019 arrojó un retroactivo de \$19.615.151.00**, luego tal acuerdo es abiertamente ilegal, y es que ello se ratifica simplemente comparando lo concertado con la tarifa del Colegio Nacional de Abogados, que para estos eventos, en su artículo 14.5 establece: "***Gestiones sobre el reconocimiento de prestaciones sociales ante entidades oficiales o los respectivos fondos: El 12% del valor reconocido. En pensiones se tendrá en cuenta el 12% sobre las mesadas reconocidas***" siendo evidente la desproporcionalidad del pacto escrito al que hace alusión el recurrente, pues este cotejo aplica, en la medida que, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática, en relación con el tema de las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados, aduciendo que, si bien "*son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere*",... *a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados*"⁴. Y en ese orden de ideas, es claro, que, en este asunto, lo pactado como honorarios palmariamente supera con creces el que sería el límite máximo por la gestión adelantada, **luego no puede pretender el apelante que el operador jurídico de primer grado y esta Corporación avalen un acuerdo claramente ilegal, desleal, desproporcionado y abusivo de la condición de invalidez del beneficiario** de una pensión de sobreviviente equivalente al mínimo legal.

VALOR HONORARIOS CONTRATADOS = \$ 53.635.993,5, adeudados por el deudor o cliente.

⁴ Sentencia T-1143 de 2003.

Tampoco es de recibo el argumento respecto a que lo acordado obedecía además, a honorarios anteriores adeudados, pues ello contradice lo literalmente expuesto en el contrato, en el que se estipula que lo cobrado es con el fin de que la abogada ***tramite el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante el fondo de pensiones y cesantías Protección S.A. de la afiliada fallecida señora ALINA JIMENEZ TAMAYO, a favor de su hijo interdicto señor MIGUEL ISAZA JIMENEZ,*** aunado a que no fue demostrado lo contrario, máxime que la primera instancia concluyó que los servicios prestados por la mandataria en los otros trámites de sucesión y demás actuaciones en favor del hoy demandado, fueron pagados, **lo que no fue objeto de reparo.**

Finalmente, respecto a la pretensión subsidiaria, no tiene vocación de prosperidad, pues conforme a la tarifa de Conalbos para estos asuntos (numeral 14.5), se señala un valor del 12% sobre las mesadas reconocidas, luego como se vio, es este el tope a cobrar, lo que en efecto fue lo condenado por el juez de primera instancia, en ese orden de ideas, pretender una suma superior bajo el argumento *de que hasta el día de hoy se ha entregado al beneficiario la mesada pensional reconocida gracias a los buenos oficios de la Dra. Archila,* equivaldría al mismo planteamiento desproporcionado que ya se examinó.

Conforme a las consideraciones anteriores se impone **la confirmación de la sentencia revisada.**

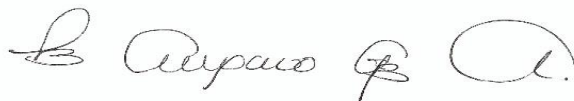
Costa en esta instancia a cargo de la parte demandante, al no haber prosperado el recurso interpuesto. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **Nicolas, Carolina y Julián Restrepo Archila, sucesores de Olga Beatriz Archila Peláez**, en contra de **Diego Luis Isaza Sánchez**.

Costa en esta instancia a cargo de la parte demandante, al no haber prosperado el recurso interpuesto. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

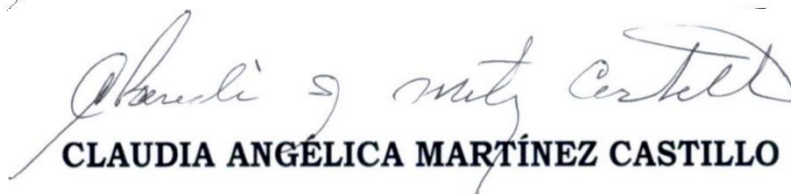
Los magistrados (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO